



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Catalina Morales Pérez
DEMANDADA:	Hacienda Cerrogrande SAS en liquidación
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
TEMA	Concurrencia de contratos
DECISIÓN:	Confirma
RADICADO Y LINK:	052663105-001-2019-00236-01 (094) 05266310500120190023601

En la ciudad de Medellín, a los diez (10) días de mayo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y como ponente, **Claudia Angélica Martínez Castillo**, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **CATALINA MORALES PÉREZ** en contra de la **HACIENDA CERROGRANDE SAS EN LIQUIDACIÓN**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado. Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La señora Catalina Morales Pérez pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con Hacienda Cerrogrande SAS en liquidación desde el 16/07/2012 y hasta el 27/03/2019 con un salario de \$2.300.000 pesos; por lo que busca se condene a la demandada a pagar salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social por todo el período laborado reajuste de los salarios devengados; indexación, costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones en que se desempeñó como gerente de la sociedad demandada desde el 16/07/2012 al 27/03/2019, de acuerdo las funciones del

artículo trigésimo noveno de los estatutos; que como salario se estableció la suma de \$2.300.000 pesos; pero que la demandada no le pagó sus salarios, prestaciones sociales, vacaciones ni cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social.

Admitida la demanda e integrada la litis, el liquidador de la demandada no contestó la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, en sentencia del 29 de marzo de 2022, absolvió a la demandada, para ello argumentó que en este caso no se puede predicar la existencia de una relación laboral cuando la demandante es la gerente y socia mayoritaria de la demandada, ya que ostenta el 95 % de las acciones; y debido a que no aportó prueba suficiente de la que se predique que prestó sus servicios en forma personal y subordinada a ella misma, quien podía tomar decisiones relativas a la gerencia de la compañía de acuerdo al artículo vigésimo tercero. Que de las documentales consistentes en los documentos firmados como gerente y las funciones de los estatutos no prueban por sí solas que prestó sus servicios de forma personal y subordinada; y que además ella tenía el poder de subordinación de los empleados, así como de remover su mismo cargo con la votación de más del 80% de las cuotas iniciales. Desvirtuó la relación laboral de acuerdo a la manifestación de la demandante que en ningún momento le pagaron remuneración salarial, como elemento esencial de la misma, y por el contrario lo que tuvo como probado es que ejercía su función como propietaria de la sociedad en calidad de gerente, y a quien le convenía realizar la gestión en debida forma y no como una empleada más de la sociedad.

III. RECURSO DE APELACIÓN:

3.1 RAZONES DEL RECURSO

La demandante, a través de su apoderado, criticó que el juzgador desconociera la posibilidad de la concurrencia de contratos, perdiendo de vista que la relación societaria entre ella y la demandada no excluye la relación laboral producto de la actividad personal que ella ejecutó; que por ser una sociedad de capital, no existe

obligación ni en los estatutos para que la persona que tenga una mayor participación en la sociedad deba realizar la representación o las funciones de la actora como gerente.

Aseveró que entre ellos se dio una relación laboral mediada por la subordinación a la asamblea general, a que estaban sujetas todas las acciones y actividades que desempeñó como gerente, lo cual no se contrapone con su participación que, aunque mayoritaria, no alcanza el 100%.

Alegó que participar en la asamblea era a título de accionista y no de persona natural que desempeñaba una actividad laboral, por eso no se le podía como accionista, cuando tiene un patrimonio independiente; que acreditó las actividades materiales para desempeñar el cargo de gerente que, solo existir, ocasionan la presunción del art. 24 CST; así como que el no pago de los salarios no puede constituirse en la inexistencia de este, ya que favorecería al empleador incumplido, y que en la demanda se estableció el valor acordado como salario.

IV. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

Solo presentó alegatos la parte demandante e insistió en los argumentos planteados en su recurso ante el juez de instancia, que se acreditó la prestación personal del servicio por parte de la demandante a favor de la demandada y su subordinación con la asamblea general de accionistas; que los hechos de la demanda son susceptibles de confesión ante la ausencia del demandado a la audiencia del artículo 77 num. 2 CST; que el fallo de primer grado desconoció el precedente con relación a la concurrencia del contrato societario y laboral al tener en cuenta que la demandada es una sociedad de capital cuyo contrato societario exige un aporte de capital no de prestación personal de un servicio; que se violó la constitución al exigirle a la demandante una carga probatoria que no tenía, carga que disminuye ante la presunción jurídica, ni se valoró en su integridad el material probatorio ni utilizó sus facultades para llegar a la verdad procesal; y que las pretensiones consecuenciales de condena, al estar determinadas por las declarativas no existía motivación específica para desestimarlas y que por el contrario corresponden a derechos mínimos consagrados en la legislación colombiana para los trabajadores; y que al menos debió reconocerle a la demandante el salario mínimo legal mensual vigente configurada la presunción legal del contrato de trabajo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

Conoce la Sala del recurso de apelación de la sentencia en favor de la parte demandante, y del grado de consulta de conformidad con lo señalado en el artículo 66ª y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al no evidenciarse ausencia de los presupuestos procesales ni vicios que invaliden lo actuado.

5.2. PROBLEMA JURIDICO.

Esta Sala se ocupará de analizar, si se demostró la concurrencia del contrato societario y laboral de la demandante, y si hay lugar a la aplicación a la presunción legal del artículo 24 CST. En caso positivo, si procede consecuencialmente el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a la seguridad social.

5.3. HECHOS PROBADOS

Constituyen hechos pacíficos y, por lo tanto, quedan excluidos de la discusión, la constitución de la sociedad Hacienda Cerrogrande SAS y la participación de la demandante en la misma con una participación del 95 % de las acciones, el cargo de gerente a término indefinido para la cual fue nombrada a término indefinido, y el proceso de liquidación en que se encuentra la sociedad demandada.

5.4. CONCURRENCIA DE CONTRATOS Y PRESUNCIÓN DE VERACIDAD

El Código Sustantivo del Trabajo, a fin de regular las relaciones de derecho individual del trabajo, entre ellas las de carácter individual, consagra la definición del contrato de trabajo, los elementos esenciales que lo componen, y la presunción de su existencia a favor de quien alega la calidad de trabajador (arts. 22, 23 y 24). Significa que quien alega que existe un contrato de trabajo o relación laboral debe probar la prestación personal del servicio, para que entre a regir en su favor dicha presunción; legal, que admite prueba en contrario, lo que faculta al empleador para contraprobarla y entrar a desvirtuarla.

En el caso concreto, tenemos que a pesar de estar notificado en debida forma el liquidador de la demandada Hacienda Cerrogrande SAS, no compareció al proceso ni a la audiencia de conciliación del artículo 77 num. 2 y 3 del CPTSS. Esta circunstancia es en la que la demandante soporta su inconformidad, pidiendo que se apliquen las consecuencias de la confesión ficta o presunta originadas por la inasistencia, sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta por ser una presunción legal, admite prueba en contrario, acerca de este aspecto, la CSJ (Corte Suprema de Justicia) en sentencia SL660 de 2019 señaló:

Finalmente, oportuno es recordar que de conformidad con el artículo 201 *ibidem*, toda confesión puede ser infirmada a partir de la valoración de otras pruebas (CSJ SL 28398, 6 mar. 2007, CSJ SL 39357, 13 feb. 2013, CSJ SL9156-2015 y CSJ SL3865-2017), en la medida que el juez de trabajo está prevalido del principio de libertad probatoria y no está sometido a una tarifa legal de pruebas, de manera que puede otorgarle mayor valor a unas en perjuicio de otras y, por tanto, la prueba de confesión ficta no impide, de forma definitiva, llegar a otras conclusiones fácticas (CSJ SL 28398, 6 mar. 2007, reiterada en la CSJ SL13572018).

Específicamente, en torno a la confesión ficta prevista en el artículo 77 del CPTSS, la Corte en la sentencia CSJ SL6849-16 precisó que:

No necesariamente la consecuencia adversa que ha de sufrir la parte incumplida en la audiencia de conciliación, esto es sufrir los efectos de la confesión ficta, ha de determinar la convicción del juzgador sobre los hechos objeto del litigio, puesto que es bien sabido que el juzgador de instancia, de acuerdo con el artículo 61 del CPT, puede formar libremente su convencimiento de la verdad real “inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal de las partes”.

La confesión ficta prevista en el artículo 77 del CPT es una presunción legal que admite prueba en contrario; por tanto, si, en el sub lite, el ad quem tomó la decisión fundado en otras pruebas como la testimonial, los interrogatorios de parte y las documentales, sin hacer alusión expresa a la confesión ficta en comento, bien se puede entender que le dio más peso a aquellas pruebas para efectos de establecer las premisas fácticas, lo cual es perfectamente legítimo en arreglo al precitado artículo 61 del CPT”.

Igualmente, la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema ha indicado que la aplicación de la confesión ficta presupone que el juez, durante la etapa procesal correspondiente especifique en concreto los hechos susceptibles de confesión con el fin de preservar el derecho de defensa de las partes. Así, para poder inferir una confesión ficta frente a la forma como la parte actora narró dichos hechos, indiscutiblemente debía singularizarse o especificarse qué aspectos eran materia de confesión ficta, pero como no lo hizo el a quo, es claro entonces que no existió y la segunda instancia no podrá concederle validez alguna.

5.4 DEL CASO EN CONCRETO

Uno de los puntos de reparo contra la sentencia consiste en que la primera instancia no tuvo como ciertos los hechos de la demanda, a pesar de que la parte demandada asumió durante el juicio, una conducta contumaz, por el contrario, le impuso una

carga probatoria que no le incumbe; controvierte también lo considerado por el juez en cuanto a que las funciones de gerente de la compañía las ejecutó en el desarrollo del objeto de la sociedad, que no hubo subordinación ya que ella tenía el 95 % de las acciones, por lo que no podía estar subordinada a ella misma; aunado a que no se demostró la remuneración salarial presuntamente devengada.

Al revisar el acervo probatorio recaudado en el proceso, tenemos en primer lugar que la parte demandante plantea la concurrencia de contratos, el societario en virtud de la constitución de manera voluntaria por la demandante de la sociedad Hacienda Cerrogrande SAS con una participación del 95 % de las acciones, y de la cual era su gerente, de acuerdo a los Estatutos por los cuales se constituyó la misma, y que obra a folios 9 a 24. Y el contrato laboral –contrato realidad- de acuerdo a las funciones que ejerció como gerente de la misma sociedad. Dichos Estatutos en el artículo vigésimo tercero consagra cómo órganos sociales de la sociedad mentada:

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: ÓRGANOS SOCIALES.- Para los fines de su dirección, administración y representación, la sociedad tiene los siguientes órganos:

- a) Asamblea General de Accionistas.
- b) Gerencia

La dirección de la sociedad corresponde a la Asamblea General de Accionistas.

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo del Gerente, quien será reemplazado únicamente en sus faltas absolutas por un suplente.

El Gerente podrá ser reemplazado por decisión de la Asamblea con el voto favorable del 80% de las acciones suscritas y pagadas.

Cada uno de los órganos indicados tiene las facultades y atribuciones que le confieren los estatutos, las que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales.

Que la asamblea de accionistas la constituye los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones; y que el *quorum deliberatorio* será con el plural de accionistas que represente, la mitad más una de las acciones suscritas, de acuerdo a los artículos trigésimo y trigésimo primero, no sin antes advertir que solo figura la demandante Catalina Morales Pérez y Luz Elena Sánchez de Orozco, ésta última con una participación del 5 % de las acciones. En el artículo trigésimo sexto contempla las funciones de la asamblea general de accionistas, entre ellas: “d) *Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la remuneración del primero*”. Y en su artículo trigésimo séptimo indica:

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: GERENTE.- La administración inmediata de la compañía, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un Gerente, y en este acto ha sido nombrada la señora **Catalina Morales Pérez**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **32.297.016** expedida en Envigado y domiciliada en Calle 41ª sur No. 43ª - 114, y ocupara el cargo por un período indefinido contado a partir de la inscripción de este documento en el registro mercantil, no obstante podrá ser removido por la Asamblea General de Accionistas en cualquier tiempo, la que tiene dicha facultad. _____
Todos los empleados de la compañía, con excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas estarán sometidos al Gerente en el desempeño de sus cargos.

Y en el artículo trigésimo noveno señala las funciones que debe cumplir entre otras se indica:

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: FUNCIONES.- El Gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, o la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de las empresas, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Asamblea General de Accionistas, según la autoridad definida. El Gerente requiere autorización previa de la Asamblea de Accionistas para la celebración de cualquier contrato cuya cuantía supere los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) para la fecha de la negociación.

Así como las enunciativas que se enlistan en el párrafo siguiente, de la cual se desprende que las mismas funciones hacen referencia a que es un “mandatario con representación”, es decir, que debe desplegar una serie de gestiones para llevar a cabo el objeto social por el cual se constituyó la empresa bajo su intelecto e idoneidad. En tal sentido, que la demandante ejerza el cargo de gerente de la sociedad en la que participa con la mayoría de las acciones, no impide que se haya trezado una relación laboral, ya que puede darse bajo la figura del contrato realidad que envuelve el trabajo asalariado, siempre que confluayan los tres elementos indicados en precedencia en el artículo 23 ibidem, pero es precisamente ese primer elemento de la –prestación personal del servicio– que no se demostró dentro del sumario, ya que, contrario a lo aseverado por la apelante, la confesión presunta no se declaró por la juez.

En otras palabras, el juez de primera instancia omitió realizar una declaración clara y precisa de aquellos supuestos fácticos susceptibles de confesión, de modo que, para que opere la figura de la confesión ficta, es indispensable, según el criterio reiterado de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el juez de primera instancia identifique y especifique cuales hechos de la demanda inicial son susceptibles de confesión en los términos del artículo 191 del CGP, para que la parte contraria pueda ejercer eficazmente y de manera oportuna su derecho de contradicción (CSJ SL7145-2015, reiterada en la CSJ SL3865-2017).

Para ello, tal y como se expresó en la sentencia de primera instancia, las pruebas traídas por la demandante para soportar sus dichos, no son suficientes para demostrar por sí solas la prestación de un servicio de la demandante a favor de la demandada, ya que el Acta de entrega parcial, el acta n° 0010 de septiembre 10 d 2014, la autorización de entrega y movilización de tanques para enfriamiento de septiembre 25 de 2016, el *letter of commitment* del 15 de mayo de 2018 (carta de compromiso), solo dan cuenta del desarrollo de sus funciones como gerente de la sociedad que demandada para obtener el fin económico de la sociedad, sin que de ellas se pueda predicar una subordinación ya que no hay por ejemplo un acta de la asamblea de accionistas que la respalde para ejecutar las mismas, no se puede determinar los extremos temporales señalados, ni mucho menos que se haya percibido un salario para una fecha al menos determinada, ni por concepto de remuneración como quedó pactado en los mismos estatutos (fl. 42, 43 a 44, 45, 46 a 47 archivo 01). Tareas que deben entenderse como el aporte a los fines para lo cual se constituyó la sociedad para repartir beneficios, de los que participa tanto el gerente o administrador como el trabajador, pero que, si asume riesgos o pérdidas, solo recaen en cabeza de los socios, como en este caso la demandante, quien desplegaba acciones dentro de su autonomía e independencia.

El principio de la libre formación del convencimiento (art. 61 CPTSS) faculta al juez laboral para decidir conforme a las pruebas que le permitan tener claridad de los hechos de la demanda, y en este caso la orfandad probatoria es evidente por cuanto, a pesar de que la demandante pidió y fueron decretadas las pruebas testimoniales, a posteriori, desistió de ellas, aunado a ello, la primera instancia se abstuvo de declarar la confesión ficta o presunta dentro de las diligencias correspondientes.

Ante la inexistencia de medios de prueba que permitan variar la decisión de primer grado, la Sala la confirmará porque la parte demandante incumplió la carga de demostrar las premisas fácticas en las que se fundamentaban sus pretensiones, tales supuestos no se podían derivar solo de las solas afirmaciones contenidas en la demanda.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación se confirmará.

Costas procesales de segunda Instancia a cargo de la demandante, y en favor de la demandada. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. DECIDE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, el 29 de marzo de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **CATALINA MORALES PÉREZ** en contra de la **HACIENDA CERROGRANDE SAS EN LIQUIDACIÓN**, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: Costas procesales de segunda instancia a cargo de la demandante, y en favor de la demandada. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ